CATASTRAL

***** y que en virtud de ello he adquirido la propiedad por prescripción.

b).- Como consecuencia de lo anterior, que dicha declaración se tenga como título de propiedad y sea inscrita, previa protocolización de constancias en Registro Público de la Propiedad.

c).- El pago de los gastos y costas en caso de oposición.

-----El Juez de Primera Instancia, por auto del día veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dio entrada a la demanda en la vía y forma propuesta y, con las copias simples de la misma, ordenó emplazar a la parte demandada ***** ***, para que la contestara dentro del término de ley, lo cual hizo mediante escrito de fecha once de mayo de dos mil veintiuno.

-----Establecida la litis, se continuó con la sustanciación del juicio por sus demás trámites legales y, con fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Primera Instancia dictó la sentencia definitiva correspondiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: -----

“- - - **PRIMERO:-** Por el argumento obsequiado en el cuerpo de esta sentencia, es concluyente que ha resultado **improcedente**, la acción de **JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE PRESCRIPCIÓN POSITIVA**, promovido por la C. ***** en contra de *****.

- - - - **SEGUNDO:-** Se absuelve a ***** de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte actora. Sin hacer especial condena en costas, tomando en cuenta que este

pronunciamiento judicial no se vincula a ninguno de los supuestos previstos por los ordinales 130, 131 y 132 de la ley del proceder civil local.

- - - TERCERO:- Notifíquese a las partes que, de conformidad con el Acuerdo 40/2018 del Consejo de la Judicatura de fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, una vez concluido el presente asunto contarán con 90 (noventa) días para retirar los documentos exhibidos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

- - - - Notifíquese Personalmente.

----- Inconformes con la sentencia anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación mismo que les fueron admitidos en ambos efectos por autos de fechas diecinueve y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, del cual correspondió conocer por turno a esta Sala Colegiada, la que, por conducto de su Presidencia, radicó el presente Toca con fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, y ordenó dictar la resolución correspondiente y turnó, para la elaboración del proyecto de resolución.-----

----- **SEGUNDO.-** La parte actora expresó como concepto de agravios lo contenido en su memorial de 4 (cuatro) hojas, de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno que obran agregados a los autos del presente Toca, de la foja 7 (siete) a la 10 (diez); mientras la demandada de 18 (dieciocho) hojas, de fecha dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, que obran agregados a los autos del presente Toca, de la foja 43 (cuarenta y tres) a la 60 (sesenta)

respectivamente, agravios a que se refieren los razonamientos que se expresan en el siguiente apartado. -----

----- **C O N S I D E R A N D O:** -----

-----**PRIMERO.-** Esta Primera Sala Colegiada en materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es competente para conocer y resolver del presente recurso de apelación, conforme a lo dispuesto por los artículos 104, fracciones II, y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 104 y 106 fracción I de la Constitución Política local; 20, fracción II, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, artículos 926 y 947 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y Punto Cuatro, inciso b), del Acuerdo General del 31 de marzo de 2009, emitido por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y publicado en el Periódico Oficial de la entidad de fecha 7 de abril de 2009.-----

-----**SEGUNDO.-** Los conceptos de agravio expresados por la parte actora y apelante *****., consisten en su parte medular, en lo que a continuación se transcribe:-----

A G R A V I O S

Me irroga un agravio la sentencia dictada en autos por el a quo en virtud que infringe las leyes del procedimiento, ya que omite realizar una análisis jurídico de la procedencia de la acción con base a las pruebas aportadas por la suscrita, tal como se lo impone la fracción IV del artículo 113 del código

de procedimientos civiles del estado; en efecto, con las pruebas aportadas por la suscrita a los autos se justificaban los extremos de la acción intentada, relativo al primer elemento de la acción consistente en el justo título causa generadora de la posesión; sin realizar pronunciamiento alguno por parte del a quo en cuanto a la insuficiencia del título generador de mi posesión, falta de fundamentación y motivación que infringe mis derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica al faltar la sentencia apelada a los principios de congruencia, motivación y exhaustividad; ahora bien, es claro y palpable que transcurrió el término de la prescripción, hecho respecto del cual la demandada no suscitó controversia y debe tenerse por cierto, ya que no contravirtió la fecha de iniciación de la prescripción y que debe tenerse por admitido; en efecto, contrario a lo sostenido por el a quo en su resolución, se encuentra probado el hecho relativo a la posesión ya que inclusive la demandada admitió la existencia de diversos juicios, lo que hace presuponer y acreditar el término prescriptorio, lo que no tomó en cuenta el juez de primera instancia; así mismo violenta los principios reguladores de la prueba al omitir fijarles el alcance debido en razón que si bien, les otorga valor probatorio, también lo es que no les fija o señala los alcances que tienen, es decir el hecho o hechos que se tienen por acreditados, mediante la individualización de cada una de las probanzas y así poder llegar a la convicción de acreditamiento de los elementos de la acción, en concreto, el relativo al justo título o causa generadora de la posesión; continúa diciendo el a quo, en la resolución apelada que la testimonial tiene valor probatorio, pero sin que este resulte útil a la suscrita oferente de la prueba para tener por acreditada la causa generadora de su posesión, lo que es incongruente, faltando al principio regulador de la prueba porque, por una parte no se suscitó controversia por la demandada respecto al momento que entré a poseer, ya que sólo se limita a negar la operación de la prescripción negativa, pero no en cuanto a la fecha en que entré a poseer, por la otra, en cuanto al término en que se dio el plazo de 5 años, que se encuentra probada con la propia confesión de la demandada quien admitió y reconoció la existencia de un contrato de compraventa, el que si bien es cierto fue anulado, ello no incide en nada en la procedencia del primero de los elementos de la acción, por el contrario, corrobora mi afirmación de que en el año 2008 inició el término para a prescripción positiva reclamada, y el a quo omite tomar en cuenta que al valorar los testimonios de una

pluralidad de testigos que declaren al momento de los hechos, no se debe exigir deposiciones precisas y exactamente circunstanciadas, pues debe tenerse presente que la imágenes o recuerdos se sujetan a una ley psicológica, que debido a que la influencia del tiempo operado en la conciencia de los testigos, hace que las declaraciones no sean uniformes y que en ellas se den diferencias individuales; siendo solamente exigible que los atestados no sean contradictorios en los acontecimientos sobre los que depusieron, tal como lo aconteció en el desahogo de la probanza de mérito ofertada y desahogada por la actor. Por lo que si las contradicciones de los testimonios, sólo se refieren a datos circunstanciales y no al fondo de sus respectivas versiones, aquéllas son intrascendentes y no restan valor probatorio a las declaraciones, tal como sucediera en autos en la que si bien el juez le confiere valor probatorio, también es que, le fija un indebido alcance, vulnerando en perjuicio de la accionante los principios reguladores de la prueba en materia de valuación; por tanto, aunque el valor de la prueba testimonial queda al prudente arbitrio del juzgador, ello no debe violar las reglas fundamentales sobre la prueba, pues debe ser valorada en su integridad, como lo es que los testigos coincidan tanto en lo esencial como en lo incidental del acto; conozcan por sí mismos los hechos sobre los que declaran y no por inducción ni referencia de otras personas; que expresen por qué medios se dieron cuenta de los hechos sobre los que depusieron aun cuando hubieren sido tachados por la contraparte; que justifiquen la verosimilitud de su presencia en el lugar de los hechos; que den razón fundada de su dicho y que coincida su ofrecimiento con la narración de los hechos materia de la Litis, tal como sucedió en el presente juicio y que el a quo omitió tomar en cuenta en detrimento de los derechos fundamentales de la accionante.

Por otra parte, si el a quo les confirió valor probatorio a los testigos ofertados, por ende estaba obligado a tomar en cuenta los hechos sobre los que depusieron, resultando por un lado que les confiera valor probatorio y por otros decir que no es útil su declaración, faltando a los principios de fundamentación, motivación y exhaustividad, ya que si bien señala el fundamento en que se apoya, las razones, motivos o circunstancia que expone, no se adecuan al supuesto hipotético normativo en que pretende fundarlas.

Tampoco toma en cuenta el juez, el hecho relativo a que la demandada en su contestación de demanda, no obstante de

hacerlo con evasivas y de manera contradictoria al manifestar que no es exacto que haya celebrado contrato verbal de compraventa el 11 de febrero de 2008 para después admitir de manera implícita y de manera afirmativa que mi posesión fue del 11 de febrero de 2009, con lo que se colmaba el requisito relativo a la fecha en que entró a poseer la accionante el inmueble y por consecuencia , el momento a partir del cual empieza a correr la usucapión o prescripción positiva, ya que sin perjuicio que haya sido en el 2008 o 2009, en ambas fechas se da el término prescriptorio.

Lo anterior, habida cuenta que tal manifestación al momento de contestar la demanda, constituye una confesión espontánea con pleno valor probatorio y sin necesidad de ratificación, lo que conlleva a que el juez violente las leyes del fondo del asunto, ya que tenía como consecuencia el tener por probado el hecho al plazo prescriptorio. Por otra parte, hecho que el contrato de compraventa haya sido anulado, no quiere decir, que no haya existido el justo título, pues la compraventa aunque haya sido anulada, constituye una consecuencia de la causa generadora de la posesión, es decir, que aun y cuando el contrato haya sido anulado, ello no quiere decir que no haya causa generadora de la posesión, porque al citado contrato no es sino el cumplimiento de una formalidad, ya que basta con la existencia del conocimiento y el objeto para que el acto jurídico sea existente, es decir, que al contrato se perfeccionó por el mero consentimiento, resultando la formalidad una consecuencia de aquel; tampoco toma en cuenta el juez que los hechos narrados en la demanda, obedece a hechos distintos contenidos en el citado contrato escrito.

Por lo tanto, adminiculada la testimonial con la confesión espontánea al momento de contestar la demanda, llevaban a la conclusión de tener por probado el primer elemento relativo a la causa generadora de la posesión, lo que constituye el justo título en virtud del cuál entro a poseer la actora; usucapión que se tenía por probada, ya que al momento de demandar se manifestó que aunque se sabía que el título era insuficiente, la posesión era de buena fe, ante la errada nación que con ello bastaba para estar poseyendo en concepto de propietario, hecho del cual no realizó pronunciamiento alguno el órgano resolutor de origen y que conlleva a que se violenten en perjuicio de la actora las leyes del procedimiento en materia de valuación de pruebas, ya que se omitió fijarles el alcance debido, trascendiendo al

resultado del fondo del asunto en perjuicio de la apelante, ya que la consecuencia era tener por acreditada la causa generadora de la posesión y por consecuencia la procedencia de la usucapación o prescripción positiva. En efecto, los testigos ofertados por la actora, acreditaron la existencia del contrato verbal de compraventa; respecto a la fecha de su celebración fue confirmada por la propia demanda quien al momento de contestar la demanda, si bien admitió un hecho narrado por la actora en diverso juicio, tal manifestación de la fecha le perjudica por ser la admisión de un hecho relativo a la fecha en que se llevo a cabo la compra venta, al señalar el 11 de febrero de 2009, es decir, que la fecha no fue del año 2008, si no del 2009, con lo que quedaba probado el primer elemento de la acción intentada y por consecuencia, la fecha del término respectivo, lo que no hizo el juzgador de analizar y ponderar, omisión que tiene el alcance de trascender al resultado del fallo, al privarme del derecho a adquirir por usucapación el bien litigioso.

Dice el juez, que la acción no procedía porque, “ no se encuentran acreditados los elementos de tiempo, lugar y forma, que acrediten la causa generadora de su posesión, ya que no existe una confesión expresa del demandado, que acredite la celebración de dicho contrato verbal, lo que tuvo que ser previo a la iniciación del presente juicio, siendo esto necesario esto para la procedencia de la acción de usucapación”, sin embargo, el juzgador falla a los principios de motivación congruencia y exhaustividad, resolviendo extra petita ya que se excede en sus atribuciones, al pronunciarse sobre cuestiones no sometidas al proceso por las partes; en efecto, tal institución procesal se presenta en un proceso cuando el juez al emitir pronunciamiento se pronuncia sobre un pedido o pretensión no propuesta por las partes, es decir sobre algo no fue discutido en el proceso por las partes, es decir decide sobre algo que no fue discutido en el proceso por las partes, en consecuencia se aparta del thema decidendum; y es que , lo aducido por el juez y de lo que el presente párrafo trata, no formó parte de la Litis, es decir, que el juzgador sólo se puede ocupar de cuestiones aducidas y controvertidas en los escritos fijatorios de la Litis, es decir, demanda y contestación y si tales cuestiones relativas al tiempo, lugar y forma no fueron controvertidas, el Juzgador se encontraba impedido para analizarlas, habida cuenta que la demandada sólo suscito controversia respecto a la inexistencia del contrato de compraventa en relación a que el

escrito había sido rescindido y en cuanto a su fecha de celebración, pero jamás en relación a los requisitos que señala el juez en el apartado que se estudia. La fijación o delimitación de la litis representa la obligación de precisar claramente las pretensiones del actor y la oposición de la demandada, por virtud del cual debe explicarse del detalle, como parte de las razones y consideraciones que den sustento a la decisión jurisdiccional, para estar en condiciones de resolver la controversia de manera completa, congruente y exhaustiva como lo exige el principio de justicia completa previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de litis que contienen los diccionarios no especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, actuación en juicio, pero tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras instituciones jurídicas porque no es totalmente exacto que toda la litis contenga un pleito o controversia, pues se omiten situaciones procesales como el allanamiento o la confesión total de la demanda y pretensiones en que la instancia se agota sin mayores trámites procesales y se pronuncia sentencia, que sin duda será condenatoria en la extensión de lo reclamado y por ello, se puede decir válidamente que no hay litis cuando no se plantea contradictorio alguno. Luego, se deberá entender por litis, el planteamiento formulado al órgano jurisdiccional por las partes legitimadas en el proceso para su resolución; empero se estima necesario apuntar, que es con la contestación a la demanda cuando la litis o relación jurídico-procesal, se integra produciendo efectos fundamentales como la fijación de los sujetos en dicha relación y la fijación de las cuestiones sometidas al pronunciamiento del Juez. Lo expuesto es corroborado por Francisco Carnelutti, quien al referirse al litigio, lo define como el conflicto de intereses, calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro. Es menester señalar que la litis del proceso moderno o sea, la determinación de las cuestiones litigiosas, como uno de los efectos de la resolución procesal, presenta notas características tales que, producida la contestación, el actor no puede variar su demanda, ni el demandado sus defensas, salvo algunas excepciones; por consiguiente, en términos generales, integrada la litis, las partes no pueden modificarla, y a sus límites debe ceñirse el pronunciamiento judicial. Viene al caso tratar el tema de demanda nueva y hecho nuevo, entendiéndose aquélla como una pretensión distinta, relacionada con el objeto de la acción, mientras que el hecho

nuevo se refiera a la causa u constituya un fundamento más de la acción deducida, por lo que cabe aclarar que la demanda nueva importa una acción distinta, mientras que el hecho nuevo, no supone un cambio de acción. Así, después de contestada la demanda, es inadmisibile una demanda nueva, pero por excepción, la ley permite que se alegue un hecho nuevo o desconocido, inclusive en la segunda instancia si es conducente al pleito que se haya ignorado antes o después del término de pruebas de la primera instancia. Tiene particular importancia saber si el actor ha variado su acción o el demandado sus defensas, o si el Juez se ha apartado en su fallo de los términos de la litis y para saberlo habrá que remitirse a las reglas establecidas para la identificación de las acciones. En efecto, hay modificación de la litis cuando varía alguno de los elementos de la acción: sujetos, objeto o causa, tanto respecto del actor como del demandado. Producida la demanda y la contestación, sobre ellas debe recaer el pronunciamiento, sin que el Juez, ni las partes puedan modificarla. En cuanto a la acusación de la rebeldía, tiene también sus consecuencias según la naturaleza del caso para la determinación de la litis. En lo que toca a los sujetos, debe destacarse que no podrá admitirse la intervención de terceros extraños a la litis; en lo que se refiere al objeto, después de contestada la demanda, el actor no puede retirarla o modificarla, ni ampliarla; por ejemplo, en los alegatos no pueden reclamarse intereses no pedidos en la demanda; tampoco puede el actor aumentar el monto de lo demandado, ni ampliarlo si en la contestación de la demanda, el demandado no objetó el monto de lo reclamado. En relación con la causa, al igual que los anteriores elementos de la acción, no puede ser cambiada, modificada o ampliada; por ejemplo, el actor que ha defendido su calidad de propietario, no puede en los alegatos aducir el carácter de usuario o usufructuario, o si el demandado ha alegado la calidad de inquilino, no puede luego fundarse la acción pretendiendo que ha quedado demostrada su calidad de subarrendatario. En este orden de ideas, los jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal, no pueden ocuparse en la sentencia de puntos o cuestiones no comprendidas en la Litis. **Los puntos consentidos por las partes quedan eliminados de la discusión,** así como de los que desistan. Para llegar a la justa interpretación de lo controvertido, el órgano jurisdiccional está facultado para ir más allá de los términos de la demanda u de la contestación y buscar en la prueba la exacta reconstrucción de los hechos, excluyendo sutilezas y

atendiendo a la buena fe de las partes. De ahí que, al fijarse incorrectamente la controversia planteada al tomar en consideración hechos constitutivos de las excepciones y defensas que tocaba oponer a la parte demanda, trae como consecuencia que sea incongruente la resolución apelada con un hecho que no fue opuesto como excepción. Por otra parte, suponiendo sin conceder, que fuera acertada la decisión del juez de aducir cuestiones ajenas a la Litis planteada, tales atributos se encuentran justificados, habida cuenta que en los escritos de demanda y contestación se encuentra probado el acto, quienes intervinieron en él, y si bien la demandada suscita controversia respecto a la fecha señalando el 11 de febrero de 2009, ello en nada incide en el resultado porque, hace suyo el hecho relativo a que en esa fecha se le demandó en diverso juicio, lo que implica una confesión espontánea hecha ante la autoridad judicial al momento de contestar la demanda, reconocimiento expreso que no requiere ser ratificado dada la naturaleza del acto y momento procesal en que se realiza, presunción humana que no tomó en cuenta el juzgador y que administrada con la testimonial llevaban a la conclusión de tener por acreditado el primer elemento relativo a la causa generadora de la posesión que constituye el justo título para poseer.

----- Por su parte ***** ***** ***** expresó en vía de agravios lo siguiente. -----

FUENTE DE LOS AGRAVIOS.- *Lo constituye la interlocutoria de fecha 08 de octubre del año en curso, a la cual nos remitimos refiriéndola en su integridad a efecto de resaltar su incongruencia, descomedimiento y desproporción, la que al efecto, se transcribe: (se transcribe)*

AGRAVIOS:

AGRAVIO UNICO.- *La sentencia del 8 de octubre que se impugna, es dañosa al afectar el patrimonio de la suscrita apelante, y resulta violatoria del principio de congruencia y exhaustividad previsto por el numeral 113 del Código Adjetivo Civil del Estado, por cuanto deviene incongruente con respecto de la demanda, contestación, y demás pretensiones oportunamente deducidas en el pleito, y desatiende el sentido y resultado del material probatorio incorporado por las partes en juicio, particularmente, la confesional de la parte actora y la declaración de los testigos ofertados por dicha actora; así*

como desatiende el valor probatorio de las diversas pruebas ofrecidas por la suscrita demandada, y resuelve incongruentemente en mi perjuicio y en afectación de mi patrimonio económico.

El juez de primer grado en su sentencia apelada me causa agravios al haber absuelto del pago de las costas judiciales a la parte actora, desatendiendo lo preceptuado por los numerales 131 y 136 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y se advierte que extiende patente de impunidad a la actora para que siga promoviendo a sabiendas diversas acciones de origen improcedentes, sin responsabilidad ni sanción por parte del Estado; por cuanto determinó:(se transcribe)

*En efecto, el juzgador sin mayor reflexión ni motivación alguna, disponiendo generosamente de un derecho que no es suyo (mi derecho de ser resarcida de los gastos y costas judiciales erogadas por haber sido llamada sin derecho ni causa al juicio), y en marcado perjuicio al patrimonio de la compareciente apelante, determina absolver a la actora de las costas judiciales, porque según su criterio, no se vincula su resolución a ninguno de los supuestos previstos por los artículos 130, 131, y 132 de la ley procesal civil local, pasando por alto que la suscrita fui injustamente llamada y traída al juicio erogando gastos sobre todo, en materia de honorarios de abogado, pues para defenderme de la injusta demanda de prescripción positiva, promovida por la actora ******, de origen improcedente, al promover a sabiendas de la notoria improcedencia ante la existencia de la cosa juzgada que le resulta la sentencia en proceso de ejecución, dictada en autos del expediente 358/2015. Y como así lo determinó el juez inferior, la actora sabía que estaba sujeta al cumplimiento de un juicio ordinario civil sobre rescisión de contrato de compraventa, y a sabiendas de que su posesión es meramente detentatoria y sometida al cumplimiento y ejecución de la sentencia, y a sabiendas de que en dicho juicio tramitado en los autos del expediente 358/2015, fue condenada a devolver el inmueble materia de la compraventa, y a sabiendas de que dicho bien es el mismo que ahora pretende prescribir, no obstante su conocimiento de su situación sub judice tuvo la osadía de promover el juicio de prescripción positiva, alegando un contrato verbal nunca existente, pues ninguna prueba relativa a ello trajo a juicio, llegando al grado de*

mentir ante la autoridad judicial al desconocer la existencia del anotado juicio, y además presentó en este juicio de prescripción testigos falsos y aleccionados, lo cual el propio juez advierte.

*Por lo que, al ser la suscrita llamada a juicio, y para efecto de defender mis derechos me vi en la necesidad de contratar los servicios del abogado *****
y realizar las erogaciones necesarias para llevar adelante y con éxito mi defensa del bien inmueble pretendido por la actora.*

*Dicha situación, no le mereció al juez inferior atender su obligación de analizar la temeridad y mala fe con que se condujo la señora ***** desde el planteamiento de su demanda, lo que, sin duda, debió atender el juez inferior, pues es evidente que la actora lo que pretendió es evadir el cumplimiento de lo sentenciado en el expediente 358/2015, que le condenó a la entrega del inmueble y al pago de rentas mensuales con valor a juicio de peritos, y otras prestaciones.*

Así las cosas, es innegable que el juez de origen violenta los principios de estricto derecho, legalidad, y debido proceso, así como los principios de congruencia y exhaustividad, pues no entró al estudio de los supuestos normativos previstos por el numeral 131, que establece:

ARTICULO 131.- (se transcribe)

*En efecto, para que el juez inferior absolviera a la actora **(como ilegalmente lo hizo)**, de los gastos y costas que la suscrita he erogado con mi defensa ante el llamamiento ocioso e injusto; bajo el marco de legalidad, cumpliendo con el principio de congruencia y exhaustividad, debió entrar al estudio de las fracciones I y II del numeral 131 transcrito; esto es, debió fundar y motivar, es decir, debió argumentar con claridad y precisión que ninguna de las partes procedió con temeridad y mala fe, no bastando que se hubiere manifestado ambiguamente al establecer: **“tomando en cuenta que este pronunciamiento judicial no se vincula a ninguno de los supuestos previstos por los ordinales 130, 131 y 132 de la ley del proceder civil local”**, lo cual es notoriamente ayuno.*

Pues para determinar en tal sentido, estaba obligado el juez a entrar al estudio pormenorizado, acucioso y detallado de la conducta procesal de las partes, haciendo referencia del proceder de cada una, lo cual desde luego, no aparece agotado dicho estudio sobre la conducta de las partes, pues

comenzando por la conducta de la actora, el juez debió percatarse de que la acción es de origen dolosa e improcedente, cuando la actora promueve a sabiendas de que resultó vencida en el juicio 358/2015, y condenada a la entrega del inmueble que es el mismo que ahora con la dolosa acción de prescripción pretende apropiarse, lo cual, desde que fue puesto este estado de cosas en el conocimiento del juez con la contestación de la demanda, era sobrado su conocimiento de que la actora se conducía con temeridad y mala fe; lo que debió ser suficiente para que la conducta de la actora fuera encuadrada en el supuesto previsto por la fracción II, y descartar el contenido de la fracción I invocada, al no darse el caso de que ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o mala fe para determinar que no habrá condena y que cada parte reportará las que hubiere erogado; pues es evidente que la actora ha obrado desde el origen con temeridad y mala fe y en virtud de ello, debió el juez condenarle al pago de las costas que la suscrita tuvo que erogar para defenderme en el juicio al que sin derecho alguno la actora me ha llamado, e inclusive, debió aplicar lo dispuesto por el numeral 136 del Código Adjetivo Civil y sancionarle con la condena a pagarme los daños y perjuicios a que dicho dispositivo se refiere.

De lo que se desprende, el perjuicio que me causa la sentencia impugnada, al absolver el juez a la actora causando daño y disminución en mi patrimonio económico, lo cual me causa agravio, y debo ser resarcida respecto del daño patrimonial causado por el juez de primer grado, mediante la revocación de la sentencia y la condena en costas judiciales y daños y perjuicios a cargo de la actora.

Como puede advertirse, la sentencia es evidentemente incongruente, ayuna y dañosa, y afecta el patrimonio de la suscrita apelante, en la medida que el juez de primer grado absuelve con ligereza y gratuitamente de las costas judiciales a la actora, no obstante que de su propio cercioramiento, pudo apreciar la conducta dolosa de la parte actora, pues al valorar las pruebas aportadas al juicio por ambas partes, refirió:

“... PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA: (se transcribe)

ARGUMENTO sobre violación a los principios de incongruencia y exhaustividad, y de afectación a mi patrimonio económico:

Como puede advertirse, de la prueba testimonial rendida por la parte actora, aun con la deficiencia valorativa por el valor probatorio que le reconoce en términos de los artículos 371 y 409 del Código de Procedimientos Civiles, estimando que sus declaraciones fueron claras y precisas, sin dudas ni reticencias, y que coincidieron en lo esencial del acto sobre el cual declararon (incongruencia); el juez inferior tuvo en cuenta:

- **Que los testigos C.C.**

*****, en lo medular declararon que la C.
***** habita el inmueble ubicado en

***** desde el 2008 o 2009, que la C.
***** celebro contrato con la C. *****
***** *****

- **Que se enteraron por platicas y porque trabajan con ella,**

Concluyendo el juez en que dicha prueba no le resulta útil al oferente de la prueba para tener por acreditada la causa generadora de su posesión

De igual forma, al valorar las pruebas ofrecidas por la compareciente demandada, el juez inferior tuvo a la vista, y por ende tuvo conocimiento de la conducta dolosa y temeraria y por ende de la mala fe con que se condujo de origen la actora, con los siguientes hechos:

PRUEBAS PARTE DEMANDADA: (se transcribe)

En efecto, del referido material probatorio que tuvo a la vista el juez inferior, es evidente que tuvo conocimiento de la conducta temeraria y la mala fe con que se condujo de origen la parte actora, pues de dicho material probatorio se pone en evidencia lo siguiente:

DE LAS PRUEBAS CONFESIONAL POR POSICIONES y DECLARACIÓN DE PARTE.- a cargo de actora
***** mediante diligencia de fecha diecisiete de Agosto del dos mil veintiuno, a la cual se le otorgó valor probatorio conforme en los artículos 309 y 393

del Código de procedimientos civiles, y de la cual en lo medular manifestó:

- *Que no celebros contrato de compraventa en el año 2014, ya que fue en el 2008 que se hizo contrato verbal y que desde entonces tiene en posesión la casa,*

- *Que el precio fijado respecto de la casa ubicada en calle privada Texas numero 7528 del fraccionamiento villas de la fe, fue por la cantidad de*
§*****

- *El 11 de febrero del 2008, y que en el año 2014 entrego la cantidad*

- *Que hizo un juicio de otorgamiento y consignación de pago a través de su abogado,*

- *Que si se registro ante este juzgado el juicio para entrega de escrituras bajo el numero de expediente numero 303/2015,*

- *Que en ese entonces no tenia conocimiento de que del juicio de otorgamiento de escrituras seguido en el expediente 303/2015, obtuvo sentencia adversa,*

- *Que si interpuso recurso de apelación en contra de dicha sentencia,*

- *Que si sabe que la sentencia fue confirmada por la segunda Instancia,*

- *Que si es cierto que se radico ante este juzgado juicio sobre rescisión de contrato de compraventa bajo el numero 358/2015, y*

- *Que en dicho juicio si se decreto la rescisión del contrato de compraventa,*

- *Que no fue condenada a desocupar y entregar a la C. ***** la casa ubicada en calle Privada Texas, numero 7528 del fraccionamiento villas de la fe,*

- *Que no tiene conocimiento que a la presente fecha se encuentre en ejecución la sentencia que la condena a entregar a la C. ***** el bien inmueble ya mencionado;*

- *Que si es cierto que el bien inmueble referido en los juicios numero 303/2015 y 358/2015, identificado como privada texas numero 7528 del fraccionamiento villas de la fe de esta*

ciudad, es el mismo que pretende adquirir por prescripción positiva en el presente juicio;

- *Que no corresponde la firma del recibo-contrato de fecha 7 de marzo del 2014 por la cantidad de *****) el cual fuera exhibido en el juicio 303/2015,*
- *Que si es cierto que por escrito de fecha 23 de mayo del año 2014, promovió juicio de interdicto de restitución de los derechos de custodia y retención de menores en contra de su esposo el señor ******
- *Que dicho juicio fue radicado ante el juzgado primero de primera instancia de lo familiar, bajo el numero 455/2014.*

Así mismo, del supuesto análisis valorativo realizado por el inferior al material probatorio comentado, estableció:

- *Que si bien la accionante acreditó encontrarse en posesión del bien inmueble *****), con la testimonial desahogada mediante diligencia de fecha tres de agosto del dos mil veintiuno, a la que se concedió valor probatorio,*
- *Que de dichos testimonios no se advierte, desde que fecha la C. V***** adquirió dicha posesión, ya que los testigo solo se limitan a decir que fue desde el dos mil ocho o dos mil nueve, sin dar fecha exacta, resultando adverso a lo manifestado por la parte actora, aunado ademas que de sus dichos refieren que fue a traves de platicas con la parte actora, que supieron que fue mediante contrato verbal que su presentante entro en posesión de dicho inmueble,*
- *que por otra parte también lo es que no acredita debidamente la causa generadora original de su posesión,*
- *Que, de la narrativa de los hechos de su demanda, la C. ***** manifiesta que la C. *****), le vendió en forma verbal el inmueble objeto del presente juicio, lo cual no se encuentra debidamente acreditado mediante los medios probatorios ofertadas dentro de las piezas procesales que integran el presente expediente, es decir,*

- *Que no se encuentran acreditados los elementos de tiempo lugar, lugar y forma, que acrediten la causa generadora de su posesión, ya*

- *Que no existe una confesión expresa del demandado, que acredite la celebración de dicho contrato verbal,*

- *Que el contrato de compraventa de fecha siete de marzo del dos mil catorce, documento que anexa la parte actora, el cual fuera celebrado respecto del inmueble ubicado habitacion ubicada*

***** de esta ciudad, fue rescindido en autos del expediente 358/2015 mediante sentencia firme de fecha cinco de septiembre del dos mil dieciséis, mediante el cual se le condeno a la ***** en el punto RESOLUTIVO TERCERO al pago de un alquiler o renta fijado por peritos por el uso del bien enajenado, computable a partir el mes de marzo del (2014) dos mil catorce, hasta que tenga lugar la desocupación del bien inmueble objeto también del presente juicio,*

- *Que si bien es cierto, en la diligencia confesional, a cargo de la parte actora ***** argumenta específicamente a la posición 16,*

*que no fue condenada a desocupar y entregar a la C. ***** la casa ubicada en calle ******

****** , no menos cierto lo es, que la misma promovió y agoto el Recurso Ordinario de Apelacion, radicado con el toca civil 536/2016 ante la primera Sala Colegiada del Tribunal superior de justicia del Estado, la cual por ejecutoria de fecha 7 de diciembre del 2016, decreto la confirmacion de la sentencia dictada en primera instancia,*

- *Que luego entonces dicho contrato no surte efecto alguno como causa generadora de la posesion, ni acredita posesion, asi como tampoco acredita la posesión continua e ininterrumpida, de dicho.*

- *Que por cuanto hace al argumento de que dicha posesión fue adquirida desde 11 Febrero del 2008, y que desde entonces la tiene de manera publica, y pacífica, cabe señalar dicha manifestación pierde valor, dado que como ya se dijo al haber sido condenada a la entrega del bien mediante sentencia dentro del expediente 385/2015, dicha posesión ya no cumple con el requisito establecido por el ARTICULO 729.- el cual*

refiere los siguiente. “La posesión necesaria para usucapir debe ser: I.- Adquirida y disfrutada en concepto de propietario; II.- Pacífica; III.- Continua; IV:- Pública”.

- Que ello es así, ya que dejó de ser pacífica al momento que se le requirió la entrega de bien el cual fuera objeto del JUICIO ORDINARIO CIVIL SOBRE RESCISIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA, mismo bien que también es objeto del presente juicio en el que se actúa,

- Que no pasa desapercibido que la actora C. ***** promovió JUICIO DE INTERDICTO DE RESTITUCIÓN DE LA POSESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA CUSTODIA Y RETENCIÓN DE MENORES, hecho el cual se corrobora con la respuesta dada a la pregunta número 1 del interrogatorio de DECLARACIÓN DE PARTE en cual refiere, que SI promovió dicho juicio mediante escrito de fecha 23 de mayo del 2014, mismo que fuera radicado ante el JUZGADO PRIMERO FAMILIAR de esta ciudad bajo el número 455/2014, y del cual se advierte claramente en punto número II de hechos de su escrito de demanda que estableció su domicilio conyugal en la casa de la hermana de su esposo, ubicada en *****

*****, que les fue prestada por espacio de 5 años,

- Que si bien la C. ***** niega este hecho, lo cierto es que contrario a ello en su respuesta dada en la pregunta 5, refiere que si estableció su domicilio conyugal en la casa ubicada privada Texas número 7528, de la colonia villas de la fe,

- Que como ya se dijo, en el expediente 385/2015, por sentencia firme se condenó a las partes a devolverse mutuamente lo que se hubieren dado, es decir, se obligó a la C. ***** al pago de un alquiler o renta fijado por peritos por el uso del bien enajenado, computable a partir el mes de marzo del (2014) dos mil catorce, hasta la entrega del bien,

- Que en consecuencia los derechos de posesión que pudo haber adquirido quedan sin efecto, ya que se obligó a la C. ***** a devolver el inmueble materia de este juicio.

Ante la evidencia que se desprende del caudal probatorio analizado y que tuvo a la vista el juez de origen, no puede éste con autoridad moral y buena fe determinar que en el caso no se vincula con los supuestos de los numerales 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, toda vez que

ha quedado de manifiesto la temeridad y mala fe de la actora, siendo claro que ha mentado ante la autoridad judicial como lo he dejado transcrito, y ha promovido acción de prescripción a sabiendas de que no tiene los atributos posesorios necesarios para prescribir, pues tiene conocimiento por haber sido parte material del juicio de rescisión de contrato de compraventa (358/2015), de que debe devolver la propiedad y pagar rentas a la suscrita apelante, por lo que evidentemente al concluir el juez con esa determinación es evidente que ha faltado a la buena fe del juzgador que debe permear en toda su actuación en el juicio y a mayor razón, en su sentencia; y ha incurrido en falta suprema al omitir el estudio congruente y exhaustivo de las actuaciones, y ha causado daño a la compareciente apelante al afectar mi patrimonio económico al incumplir con su deber de fundar y motivar sus resoluciones, así como ha faltado a su deber de entrar al estudio de las fracciones I y II del artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, antes de

determinar que no hay causa para condenar gastos y costas. Dispositivos relativos a la conducta de la parte actora que se ha dejado en clara evidencia supralíneas, como conducta dolosa, temeraria y de mala fe, habiendo la parte actora violado la buena fe y la lealtad procesal, sin que el juez de primer grado se haya dado por enterado de dicha conducta al desatender el cumplimiento de su deber de colmar los principios de congruencia y exhaustividad, violentando el debido proceso, como lo he dejado señalado, por lo que debe revocarse dicha sentencia en la medida que se modifique por cuanto a la indolente e irreflexiva absolución de costas emitida por el inferior, y sea la suscrita resarcida de los daños económicos causados por el juez inferior, y se fije condena a la actora par que me pague los gastos y costas que me ha originado con su injusto llamamiento a juicio.

A lo anterior, tienen aplicación por el criterio que informan, las tesis jurisprudenciales que se transcriben y que, en robustecimiento de mis argumentos, invoco a efecto de que sean tomados en cuenta por la honorable alzada.

Registro digital: 2018319

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Laboral, Común

Tesis: XI.Io.A.T. J/16 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 60, Noviembre de

2018, Tomo III, página 2012

Tipo: Jurisprudencia

LEALTAD PROCESAL. ELEMENTOS QUE LA CONFORMAN (se transcribe)

Registro digital: 2009343

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Común

Tesis: I.3o.C.79 K (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Junio de 2015,

Tomo III, página 2470

Tipo: Aislada

TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES (se transcribe)

Registro digital: 240981

Instancia: Tercera Sala

Séptima Época

Materias(s): Civil

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 109-114, Cuarta Parte,

página 40

Tipo: Aislada

COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. QUE DEBE ENTENDERSE POR ELLAS. (se transcribe)

Registro digital: 177044

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Civil

Tesis: I.11o.C. J/4

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo XXII, Octubre de

2005, página 2130

Tipo: Jurisprudencia

COSTAS. CONCEPTO DE TEMERIDAD O MALA FE PARA DECRETAR SU CONDENA. (se transcribe)

-----**TERCERO.**- Procede en primer término el estudio de las inconformidades expuestas por la parte demandada
*****.

---- La parte apelante expresó en concepto de agravio que el juez omitió el análisis de la procedencia de la acción en base a las pruebas aportadas, que sus pruebas justifican el justo título causa generadora de la posesión, que el juez no realizó pronunciamiento en cuanto a la insuficiencia de su título; que la falta de fundamentación y motivación infringe sus derechos fundamentales; que transcurrió el término de la prescripción y que la parte demandada no suscitó controversia al respecto; que no controvertió la fecha de iniciación de la prescripción; que el juez le otorgó valor probatorio a sus pruebas pero omitió fijarles el alcance debido; que la demandada no suscitó controversia en cuanto a la fecha en la que entró a poseer, que la anulación de la compraventa no incide en la procedencia del primero de los elementos de la acción, que por el contrario corrobora su afirmación relativa a que en dos mil dieciocho inició el término para la prescripción positiva; que resultan intrascendentes las contradicciones en los testimonios cuando estas refieren a datos circunstanciales y no al fondo, que dado que el juez le concedió valor probatorio a esta prueba se encontraba obligado a tomar en cuenta los hechos sobre los que

depusieron; que la demandada en su contestación afirmó que su posesión data del once de febrero de dos mil nueve, por lo que se colma el requisito relativo a la fecha en que entró a poseer y por consecuencia desde ahí empieza a correr la usucapión; que basta con el consentimiento y el objeto para que el acto jurídico sea existente, por lo si hay causa generadora de la posesión; que administrada la testimonial con la confesión realizada al contestar la demanda se justifica la causa generadora de la posesión, que al demandar manifestó que aunque conocía de la insuficiencia del título la posesión era de buena fe, porque consideró que con ello bastaba para estar poseyendo en concepto de propietario, que el juez al considerar que no se demostraron los elementos de tiempo, lugar y forma en relación a la causa generadora de la posesión se apartó del thema decidendum, que solo le correspondía el estudio de las cuestiones aducidas en los escritos fijatorios de la litis. -----

-----Los anteriores motivos de inconformidad se consideran **infundados**, en relación a la falta e fundamento y motivación que sostiene la apelante, pues consta en la resolución apelada que el juez de primer grado para declarar la improcedencia de la acción expuso lo siguiente: -----

a) Que la actora manifestó en su demanda que su contraparte le vendió de forma verbal el inmueble, pero que este hecho no se acreditó con las pruebas desahogadas, que no se demostraron los

elementos de tiempo, lugar y forma que acrediten la causa generadora de su posesión, porque no existe confesión expresa de la parte demandada que acredite la celebración del contrato verbal.

b) Que el contrato de compraventa del siete de marzo de dos mil catorce se rescindió mediante sentencia dictada el cinco de septiembre de dos mil dieciséis en el expediente 358/2015, por lo que no surte efectos como causa generadora de la posesión ni es apto para demostrar la posesión continua del bien.

c) Que la manifestación relativa a que la posesión se adquirió desde el once de febrero de dos mil ocho y que desde entonces se ha ejercido de forma pública y pacífica, perdió valor porque la actora fue condenada a la entrega del bien mediante sentencia del expediente 358/2015, pues conforme al artículo 729 del Código Civil la posesión dejó de ser pacífica desde el momento que se requirió la entrega del bien.

d) Que en la declaración de parte a cargo de la actora refirió que si estableció su domicilio en la casa ubicada en Privada Texas número 7528, colonia Villas de la Fe, pero que mediante sentencia dictada en el expediente 385/2015 se condenó a las partes a devolverse mutuamente lo que se hubieren dado, por lo que se obligó a ***** al pago de un alquiler o renta por el uso del bien, calculado a partir del mes de marzo de dos mil catorce

hasta la entrega del bien y en consecuencia quedaron si efecto los derechos de posesión que pudo haber adquirido sobre el bien.

----- Y citó como fundamento de su determinación el contenido de los artículos 721, 729, 736 y 738 del Código Civil, además los criterios jurisprudenciales de rubros: “PRESCRIPCIÓN POSITIVA. NECESIDAD DE ACREDITAR LA CAUSA DE LA POSESIÓN.”, “USUCAPION. LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, PUEDE ACREDITARSE CON UN TITULO CON APARIENCIA DE SER OBJETIVAMENTE VALIDO. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).” y “ USUCAPIÓN. CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN. DEBE SEÑALARSE PROPORCIONANDO TODOS AQUELLOS DATOS QUE REVELAN SU EXISTENCIA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).”; lo que pone de manifiesto que el juez si cumplió con su obligación de expresar las razones y el fundamento legal que tomó en cuenta para dictar la resolución en el sentido que lo hizo. -----

----- El resto de las inconformidades son **inoperantes**; porque el Juez emitió argumentos para sostener que la actora no demostró el contrato verbal de compraventa como causa generadora de su posesión; que el diverso contrato de compraventa del siete de marzo de dos mil catorce se rescindió mediante sentencia por lo que no surte efectos como causa generadora de la posesión ni acredita que esta haya sido continua; que la posesión del bien dejó de ser pacífica

porque se requirió la entrega del bien a la actora y que en virtud de la rescisión del contrato de compraventa se condenó a la actora al pago de alquiler, por lo que dejaron sin efecto los derechos de posesión sobre el bien. -----

----- De manera que sí la parte apelante a través de sus agravios no emitió argumentos con los cuales controvirtiera la totalidad de las consideraciones que emitió el juzgador de primer grado para declarar la improcedencia de la acción, pues únicamente expuso argumentos relacionados con la demostración del justo título, sin controvertir el resto de las consideraciones del fallo relacionadas con las cualidades de la posesión; los agravios se tornan inoperantes, porque al inconforme le correspondía exponer razones legales bajo las cuales evidenciara la ilegalidad de todas las consideraciones del resolutor, sin embargo, no lo hizo, de manera que el agravio debe ser desestimado. -----

----- Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia II.2o.cC.J/9 Del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, que dice lo siguiente: -----

“AGRAVIOS INSUFICIENTES. ES INNECESARIO SU ESTUDIO SI LO ALEGADO NO COMBATE UN ASPECTO FUNDAMENTAL DE LA SENTENCIA RECURRIDA, QUE POR SÍ ES SUFICIENTE PARA SUSTENTARLA. Cuando la sentencia impugnada se apoya en diversas consideraciones

esenciales, pero una de ellas es bastante para sustentarla y no es combatida, los agravios deben declararse insuficientes omitiéndose su estudio, pues de cualquier modo subsiste la consideración sustancial no controvertida de la resolución impugnada, y por tal motivo sigue rigiendo su sentido.”

----- Así como la Jurisprudencia 3^a./J.30 (13/89), sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 277, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro digital 207325, cuyo contenido es el siguiente: -

“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUÉLLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. *Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida.”*

-----**CUARTO.-** Enseguida procede el estudio de los agravios expuestos en la apelación adhesiva promovida por la parte demandada *****. -----

----- La inconforme refirió que la sentencia es dañosa porque afecta su patrimonio, que viola el principio de congruencia y exhaustividad; que le causa agravio que el juez absolviera a la parte actora del pago de las costas judiciales que desatendió el contenido de los artículos 131 y 136 del Código de Procedimientos Civiles, que permite a la actora que siga promoviendo acciones a sabienda que son improcedentes; que el juez consideró no actualizado ninguno de los supuestos previstos en los artículos 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles sin tomar en cuenta que fue injustamente llamada al juicio erogando gastos de honorarios para su defensa de la demanda improcedente de origen porque se actualiza la cosa juzgada resultante de la sentencia dictada en el expediente 358/2015 en el cual fue condenada a devolver el inmueble en juicio, que no obstante lo anterior la actora promovió el juicio alegando un contrato de compraventa verbal que es inexistente, que negó ante la autoridad la existencia del juicio previo, que presentó testigos falsos y aleccionados, por lo que con la finalidad de defender sus derechos se vio obligada a contratar los servicios de un abogado y realizar erogaciones necesarias para la defensa del inmueble; pero que el juez no atendió a su obligación de

analizar la temeridad y mala fe de la actora desde el planteamiento de su demanda, pues lo que pretendió fue evadir el cumplimiento de lo sentenciado en el expediente 358/2015. -----

----- Que el juez al pronunciarse en relación a las costas del juicio debió estudiar el contenido del artículo 131 fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles, es decir fundar y motivar porque ninguna de las partes procedió con temeridad o mala fe; que para determinar al respecto el juez debió realizar el estudio acucioso de la conducta procesal de las partes refiriéndose al proceder de cada una, que la acción es dolosa e improcedente porque promovió a sabiendas que resultó vencida en el juicio 358/2015. -----

----- Que con el material probatorio de la parte actora el juez tuvo conocimiento de la conducta temeraria y la mala fe con que se condujo; que de la evidencia que se desprende del caudal probatorio el juez no puede con autoridad moral y buena fe determinar que en el caso no se vincula con los supuestos de los numerales 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles, porque es clara la temeridad y mala fe de la actora pues mintió ante la autoridad y promovió la prescripción a sabiendas que no tiene los atributos posesorios necesarios para prescribir. -----

----- El anterior agravio se considera **fundado** porque consta que el juez al resolver en relación al pago de las costas del juicio, únicamente expuso que no se estableció condena al pago en virtud

de que el pronunciamiento no se encontraba vinculado a ninguno de los supuestos previstos en los artículos 130, 131 y 132 del Código de Procedimientos Civiles; pero sin precisar las razones por las cuales consideró no actualizado ninguno de los supuestos referidos.

----- Por ello es que esta Alzada en reparación del agravio advertido procede de manera fundada y motivada a realizar el análisis correspondiente al pago de las costas del juicio. -----

----- Así tomando en consideración que la actora al promover el juicio de usucapión, como su prestación primordial reclamó la declaración mediante la cual se le reconozca como propietaria del inmueble, en consecuencia la sentencia civil es de naturaleza declarativa, de conformidad con lo que establece el artículo 228 fracción II del Código de Procedimientos Civiles que dispone: -----

“Artículo 228. Mediante el ejercicio de la acción podrá perseguirse:

I Que se condene al demandado a realizar una determinada prestación;

II Que se declare la existencia de un interés legítimamente protegido, de un hecho, acto o relación jurídica, o autenticidad o falsedad de un documento;

III La constitución, modificación o extinción de un estado o situación jurídica; y;

IV La aplicación de las normas jurídicas encaminadas a la defensa de cualquier situación de hecho o de derecho favorable al actor; o a reparar el daño sufrido o el riesgo probable de un bien propio o que se está en la obligación de salvaguardar, o bien para retener o

restituir la posesión que a cualquiera le pertenezca de cosa o cosas determinadas.”

----- Conforme a lo anterior y a efecto de analizar la procedencia del pago de las costas del juicio es necesario citar el contenido del artículo 131 del Código de Procedimientos Civiles que textualmente establece: -----

Artículo 131. En las sentencias declarativas y constitutivas, la condenación en costas se regirá por las reglas siguientes:

I.- Si ninguna de las partes hubiere procedido con temeridad o mala fe, no habrá condena y cada parte reportará las que hubiere erogado;

II.- La que hubiere obrado con temeridad o mala fe, será condenada a pagar las de la contaría; y,

III.- Cuando el demandado se allane a las peticiones del actor antes de fenecer el término para la contestación, o el actor se conforme con la contestación a la demanda, dentro de los tres días siguientes, no habrá condenación y cada parte reportará las que hubiere erogado.”

----- En relación con el tema de que se trata, la extinta Tercera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio contenido en la tesis publicada en la página 40 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 109-114, Cuarta Parte, cuyo tenor literal es el siguiente: --

“COSTAS. TEMERIDAD O MALA FE. QUE DEBE ENTENDERSE POR ELLAS. Esta Tercera Sala ha sustentado tesis jurisprudencial número 133, visible a fojas 409 de la última compilación, en el sentido de que la facultad concedida al juzgador por la ley, para condenar al pago de las costas, cuando a su juicio

se haya procedido con temeridad o mala fe, no es absoluta, sino que debe ejercitarse de manera prudente, tomando en cuenta los datos que arrojen las constancias de autos para apreciar la conducta y la lealtad procesal y percatarse de si el litigante ha hecho promociones inconducentes, si ha incurrido en faltas de veracidad o en otros actos semejantes encaminados a entorpecer o dilatar el procedimiento contrarios a la buena fe, y esto debe razonarse en la sentencia que imponga la condena en costas por temeridad, es decir, no es el mero hecho de promoverse un juicio, hacerse promociones, ofrecerse pruebas o interponer recursos lo que determina la temeridad o mala fe, sino que debe examinarse si ese juicio se promovió por quien sostiene una pretensión injusta a sabiendas de que lo es, si las promociones, pruebas o recursos intentados son inconducentes o en éstos se ha faltado a la verdad, con el deliberado propósito de entorpecer o dilatar el procedimiento; esto es, no debe examinarse el hecho en sí, sino la intención del litigante, para determinar si obró con el propósito de entorpecer la pronta y expedita administración de la justicia.”

----- Conforme a lo anterior se debe analizar si en la actora

***** existió una conducta temeraria o de

mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas; así se

advierde que promovió el juicio manifestado que el once de febrero

de dos mil ocho celebró contrato verbal de compraventa con la

demandada, que posteriormente el siete de marzo de dos mil catorce

firmaron contrato privado de compraventa, así mismo se advierde

que durante la dilación probatoria la demandada ofreció la

confesional y declaración de parte a cargo de la actora, testimonial,

presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones; la

parte actora ofreció documentales públicas consistentes en la copia certificada de las actuaciones contenidas en los expedientes 303/2015, 358/2015 y 455/2014, confesional y presuncional legal y humana. --

----- De las constancias referidas se advierte que la parte actora refirió la existencia de dos contratos de compraventa el primero verbal de fecha once de febrero de dos mil ocho, el segundo un documento privado fechado el siete de marzo de dos mil catorce, sobre los cuales debe precisarse que, de la copia certificada del expediente 455/2014 se advierte que la propia accionante al promover el juicio de interdicto para restituir la posesión de los derechos de custodia y retención de menor afirmó que contrajo matrimonio con ***** el once de febrero de dos mil nueve y que establecieron su domicilio conyugal en la casa que les fue prestada por la hermana de su esposo, esto por el lapso de cinco años, que la casa se ubica en*****; asimismo consta que la señora ***** a través del expediente 358/2015 demandó la rescisión del contrato de compraventa del siete de marzo de dos mil catorce, que el cinco de septiembre de dos mil dieciséis se dictó sentencia mediante la que se declaró procedente el juicio, confirmada por esta Primera Sala Colegiada el

siete de diciembre de dos mil dieciséis.

----- De lo anterior y a criterio de esta Sala se pone de manifiesto una conducta de la parte actora contraria a la buena fe, pues demandó la prescripción positiva en base a dos contratos de compraventa que no justificó, uno de ellos porque la propia accionante afirmó que la casa se le otorgó en calidad de préstamo y el segundo porque la autoridad declaró su rescisión, esto porque promovió el juicio a sabiendas de su improcedencia, por lo que ocasiono que el órgano jurisdiccional destinara cierto tiempo y recursos humanos para resolver una cuestión que es a todas luces improcedente, con el evidente perjuicio del cual se duele la parte demandada, razón por la cual se le debe condenar al pago de las costas del juicio, que serán susceptibles de liquidarse en la vía incidental en ejecución de sentencia. -----

-----En tales circunstancias, procede resolver el recurso de apelación a que el presente Toca se refiere, declarando que han resultado infundados e inoperantes los agravios expuestos por la parte actora y fundados los que formuló la parte demandada, por lo que se deberá modificar la sentencia apelada a fin de condenar a la parte actora al pago de las costas de primera instancia. -----

----- En relación a las costas de segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 139 del Código de Procedimientos

Civiles, se condena a la parte actora al pago de las costas de esta segunda instancia dado que le han recaído dos sentencias adversas substancialmente coincidentes. -----

----- Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 926 y 949 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se: -----

----- **R E S U E L V E:** -----

-----**PRIMERO.**- Han resultado infundados en parte e inoperantes en parte los agravios expuestos por la actora y fundados los que formuló la parte demandada en contra de la sentencia de fecha ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente número 90/2021, correspondiente al Juicio Ordinario Civil sobre Prescripción Positiva, promovido por ***** ***** ***** en contra de ***** ***** ***** , ante el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Nuevo Laredo Tamaulipas; cuyos puntos decisorios se transcriben en el resultando primero del presente fallo.

-----**SEGUNDO.**- Se modifica el punto resolutive segundo de la resolución apelada, para quedar redactado en los siguientes términos: -----

SEGUNDO:- *Se absuelve a ***** de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por la parte*

actora. Se condena a la parte actora al pago de las costas del juicio.

-----**TERCERO.**- Se condena a la parte actora *****
***** al pago de las costas de esta Segunda Instancia.

-----**CUARTO.**- Con testimonio de esta resolución, devuélvase el expediente al Juzgado de su origen para los efectos legales consiguientes y, en su oportunidad, archívese el Toca como asunto concluido. -----

-----**NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.**- Así lo resolvieron y firmaron los Magistrados HERNAN DE LA GARZA TAMEZ y DAVID CERDA ZUÑIGA, integrantes de la Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ante la ausencia por incapacidad médica del Titular de la Octava Sala que forma parte de este Órgano Colegiado, conforme a lo previsto por los artículos 26, párrafo segundo, y 27, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo Presidente el primero y Ponente el segundo, hoy 2 dos de marzo de 2022 dos mil veintidós, fecha en que se terminó de engrosar esta sentencia, ante la Secretaria de Acuerdos, licenciada LILIANA RAQUEL PEÑA CÁRDENAS, que autoriza y da fe. -----

Mag. David Cerda Zuñiga

Mag. Hernán de la Garza Tamez
Presidente

Lic. Liliana Raquel Peña Cárdenas
Secretaria de Acuerdos

----- Enseguida se publicó en la lista del día. Conste. -----
M'DCZ/L'IDBP

El Licenciado(a) IRACEMA DANINA BALDERAS PEREZ, Secretario Proyectista, adscrito a la PRIMERA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución 60 Sesenta dictada el MIÉRCOLES, 2 DE MARZO DE 2022 por el MAGISTRADO, constante de 37 Treinta y siete fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de el representante legal de la parte demandada, los datos del inmueble en litigio y sus demás datos generales, y seguir el listado de datos suprimidos información que se considera legalmente como confidencial, sensible o reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 20 de mayo de 2022.